



Consejo General del Poder
Judicial



XUNTA DE GALICIA



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, LA VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA, LA CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR Y EL MINISTERIO FISCAL PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA PILOTO DE MEDIACIÓN FAMILIAR INTRAJUDICIAL EN LUGO.

Lugo, 8 de outubro de 2014

REUNIDOS

- El Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, **Don Carlos Lesmes Serrano** según Acuerdo (nº 2º) del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 9 de diciembre de 2013, Real Decreto 979/2013, de 10 de diciembre, (BOE 11 de diciembre de 2013).

- **D. Alfonso Rueda Valenzuela**, Vicepresidente y Conselleiro de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, que actúa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de Normas Reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, así como con lo dispuesto en el Decreto 230/2012, de 2 de diciembre, por el que se le nombra Vicepresidente de la Xunta de Galicia, y en el Decreto 229/2012, por el que se nombran los titulares de los departamentos de la Xunta de Galicia.

- **Doña Beatriz Mato Otero**, Conselleira de Trabajo y Bienestar, que actúa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 1/1983, de 22 de febrero, de Normas Reguladoras de la Xunta y de su Presidencia, y con lo dispuesto en el Decreto 229/2012, de 2 de diciembre, por el que se nombran los titulares de los departamentos de la Xunta de Galicia.

- **D. Carlos Varela García**, Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Galicia, actuando en representación del Ministerio Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado tercero, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Las partes, en el nombre y representación en que concurren, y con la capacidad legal para este acto,





Consejo General del Poder
Judicial



XUNTA DE GALICIA



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

EXPONEN

Primero.- Las administraciones públicas pueden celebrar convenios de colaboración con otras entidades públicas y con personas jurídicas sujetas al Derecho Privado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 del Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en el Acuerdo del Consello de la Xunta de 27 de marzo de 1991, sobre convenios de cooperación con otros entes públicos y de colaboración con particulares, hecho público por Resolución de la Consellería de Economía y Hacienda de 8 de abril de 1991.

Segundo.- El Consejo General del Poder Judicial, de conformidad con el artículo 104 y siguientes de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, es el órgano de gobierno del poder judicial, ejerce sus competencias en todo el territorio nacional y su presidente ostenta la representación del poder judicial y del mismo consejo.

Tercero.- A la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia le corresponden, entre otras, las competencias en materia de impulso, implantación y desarrollo de programas y actuaciones de desjudicialización de conflictos y de promoción de la mediación, especialmente en el ámbito de menores y familia, tal y como establece el Decreto 72/2013, de 25 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia y de la Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.

Cuarto.- La Consellería de Trabajo y Bienestar, a través de la Dirección General de Familia e Inclusión, tiene asumidas entre sus competencias la gestión de las políticas autonómicas en materia de acción social de apoyo a la familia, según lo dispuesto en la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia, y en la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, y en concreto las competencias de mediación familiar derivadas de la Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación familiar y del Decreto 159/2003, de 31 de enero, por el que se regula la figura del mediador familiar, el Registro de Mediadores Familiares de Galicia y el reconocimiento de la mediación gratuita.

Quinto.- La Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia en el título I ("De la familia"), capítulo VI ("Del apoyo familiar y la mediación"), dedica la sección 1ª, artículos 32 y 33, al apoyo familiar entendido como un proceso encaminado a facilitar una dinámica familiar positiva, la solución de problemas y la toma de decisiones, además de potenciar y desarrollar los recursos familiares; y en el artículo 36 establece que la Consellería de Trabajo y Bienestar, a través de la Dirección General de Familia e Inclusión, deberá promover, reforzar y ampliar los servicios de orientación familiar, de mediación y los puntos de encuentro familiar.





Consejo General del Poder
Judicial



XUNTA DE GALICIA



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

Sexto.- De acuerdo con el artículo 11, apartado tercero, de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, y tras la reforma introducida por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, se podrán celebrar convenios con las comunidades autónomas previa autorización de la Fiscalía General del Estado.

Séptimo.- Las partes coinciden en la necesidad de difundir la mediación familiar como una técnica de resolución de conflictos, y más concretamente como un proceso en el que la pareja acepta la intervención neutral y cualificada de una tercera persona (el mediador familiar), que tratará de que encuentren por sí mismos un acuerdo duradero y mutuamente aceptable considerando las necesidades de cada miembro de la familia, y especialmente las de los niños, dentro de un espíritu de responsabilidad compartida y de igualdad de los progenitores.

La mediación como procedimiento puede dar solución extrajudicial de una manera rápida y económica a los conflictos mediante procedimientos adaptados a las partes. En esta línea se describe en la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, que en su artículo 3 la define como un procedimiento estructurado, sea cual sea su nombre y denominación, en el que dos o más partes en conflicto intentan voluntariamente alcanzar por sí mismas un acuerdo sobre la resolución de su litigio con la ayuda de un mediador, procedimiento que puede ser iniciado por las partes, sugerido u ordenado por un órgano jurisdiccional o prescrito por el Derecho de un Estado miembro.

En este sentido, se considera que la mediación intrajudicial (aquella que se lleva a cabo cuando el proceso judicial ya está iniciado) resultaría ser una metodología adecuada y válida para resolver un porcentaje significativo de procesos judiciales, sobre todo en aquellos casos en los que las dos partes deberán continuar relacionándose en el futuro por tener intereses comunes, lo que se adapta a la perfección a los casos de los procesos de ruptura familiar con hijos menores.

Octavo.- Para dotar de la mayor eficacia al proceso de mediación, se considera que se debe constituir un equipo multidisciplinar de mediación en el que se integren, por un lado, juristas que expliquen a las partes la legislación aplicable a su relación y, al mismo tiempo, las necesidades y particularidades del proceso, orientándolas para llegar a un acuerdo que pueda ser validado dentro del proceso civil al que deberán enfrentarse; y, por otro lado, psicólogos que puedan resolver los problemas de acercamiento y enfoque de las partes en conflicto, con vistas a alcanzar el clima necesario para la negociación.

Noveno.- El Decreto 42/2000, de 7 de enero, por el que se refunde la normativa reguladora vigente en materia de familia, infancia y adolescencia, modificado por el Decreto 406/2003, de 29 de octubre, y por la Ley 3/2011, de 30 de junio, de apoyo a la familia y a la convivencia de Galicia, señala en el artículo 9 que los gabinetes de orientación familiar (GOFs) se constituyen como un



Consejo General del Poder
Judicial



XUNTA DE GALICIA



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

recurso especializado en el apoyo y promoción de la calidad de vida de las familias, así como de atención a situaciones problemáticas o de riesgo que puedan estar asociadas a procesos de desintegración familiar.

Los GOFs, dependientes de la Consellería de Trabajo y Bienestar, se constituyen como un recurso público de carácter multidisciplinar, integrados por personal especializado en el apoyo y en la promoción de la calidad de vida de las personas y de las familias, así como en la atención y prevención de las diferentes situaciones problemáticas que se puedan dar en el ámbito de la convivencia cotidiana.

Se trata de un servicio que pretende ayudar a las familias que así lo requieran a solucionar situaciones de crisis o conflicto, eliminando, o por lo menos atenuando, las consecuencias que estas llevan aparejadas, en la medida en que trabaja especialmente en el sentido de prevenir o evitar la implicación de los hijos en los conflictos de sus padres. Actúa asimismo como un recurso en estrecho contacto con los equipos de atención al menor, colaborando con ellos en la atención a las familias de menores susceptibles de ser sometidos a medidas de protección.

Por todo lo expuesto, las partes consideran que el GOF de Lugo puede ser un dispositivo fundamental y el recurso adecuado para la implantación de un programa piloto de mediación intrajudicial en esta ciudad, y acuerdan firmar el presente acuerdo de colaboración basándose en las siguientes

CLÁUSULAS:

Primera.- Objeto del acuerdo.

El objeto del presente acuerdo es establecer las condiciones por las que se regirá la colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia, la Consellería de Trabajo y Bienestar y el Ministerio Fiscal para la implantación de un programa piloto de mediación familiar intrajudicial gratuita en Lugo.

Segunda.- Protocolo de actuación de la mediación intrajudicial.

La mediación intrajudicial en los procesos de familia se realizará de conformidad con lo dispuesto en el protocolo de derivación anexo al presente acuerdo.

a) Actuación de los fiscales y de los juzgados de primera instancia implicados en el programa:

Los jueces de familia y los fiscales podrán, si así lo estiman oportuno, evaluar los casos concretos en los que, por sus características específicas, resulta recomendable intentar un proceso de





Consejo General del Poder
Judicial



XUNTA DE GALICIA



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

mediación, y, para estos supuestos, informar a las partes acerca de la existencia de este servicio de mediación y de las posibilidades que les ofrece, recomendando la asistencia, al menos, a una sesión informativa previa.

En caso de que las partes acepten la mediación, el juzgado, de acuerdo con el protocolo de derivación mencionado, fijará la fecha para la primera reunión con el equipo de mediación dependiente de la Consellería de Trabajo y Bienestar, reunión que tendría los efectos señalados en el artículo 13 de la Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación familiar.

A tal efecto deberán arbitrarse los medios necesarios que permitan garantizar la inmediata citación de las personas interesadas, valorándose la utilidad de crear agendas únicas informáticas de uso compartido entre las oficinas de los juzgados y el equipo de mediación. Subsidiariamente se arbitrará la más inmediata comunicación telefónica o mediante fax.

Los letrados de las partes podrán asistir al inicio de esta reunión informativa con el objeto de recibir del equipo de mediación toda la información que necesiten y de que se aclare cualquier duda sobre el desarrollo del proceso.

El juzgado, tal y como se indica en el antedicho protocolo de derivación, remitirá al equipo de mediación toda la información necesaria para el desarrollo adecuado de la mediación: identificación del juzgado, número de autos, tipo de procedimiento, identificación de las personas participantes y teléfonos de contacto, número de hijos y edades, así como información sobre la suspensión o no del proceso judicial iniciado.

b) El equipo de mediación:

El equipo de mediación estará integrado por dos personas del GOF de Lugo: una licenciada en Derecho y una licenciada en Psicología, que deberán figurar inscritas en el Registro de Mediadores Familiares de Galicia. En todo caso, se cumplirá lo dispuesto, en cuanto a los requisitos que tendrán que cumplir los mediadores, a lo dispuesto en el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de mediación.

Tercera.- Horarios del equipo de mediación y duración del proceso de mediación.

El equipo de mediación desarrollará su labor en horario de mañana, de 7:45 a 15:15 horas, durante un día a la semana.

Al objeto de conseguir la mayor eficacia, se establece una duración no superior a un mes para el proceso de mediación, que se computará desde la celebración de la primera reunión con el equipo





Consejo General del Poder
Judicial



XUNTA DE GALICIA



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

mediador una vez aceptada la mediación, sin perjuicio de la posibilidad de prórroga a instancias del equipo mediador, y de forma justificada, por un mes más.

Excepcionalmente, podría establecerse una prórroga por un plazo superior cuando se justifique debidamente, y sin que en ningún caso se superen los tres meses de duración, tal y como se recoge en el artículo 14 de la Ley 4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la mediación familiar.

Cuarta.- Principios esenciales del proceso de mediación.

- **Voluntariedad.**- Se respetará en todo caso el principio de voluntariedad en la aceptación del proceso de mediación.

- **Confidencialidad.**- La información que se utilice en el procedimiento de mediación permanecerá reservada, y únicamente se informará sobre la consecución o no de un acuerdo. En caso de que la mediación no continúe por desistir alguna de las partes, únicamente se informará al juez de este hecho, que carecerá de toda incidencia en el enjuiciamiento posterior. En todo caso el equipo de mediación está obligado a informar al juez y al Ministerio Fiscal de los datos que pudieran revelar la existencia de una amenaza para la vida o la integridad física o psíquica de alguna persona, o de cualquier hecho delictivo.

- **Igualdad de las partes.**- Se garantizará la plena igualdad y libertad de las partes, interrumpiéndose la mediación cuando se advierta la existencia de cualquier indicio de violencia o de intimidación, o cualquier otra causa que rompa este principio.

- **Homologación de acuerdos.**- El acuerdo total o parcial alcanzado, en su caso, en el proceso de mediación se comunicará por el equipo de mediación al juzgado, que entregará a las partes el acuerdo de mediación (total o parcial) y acreditará este extremo al juzgado a los efectos de constancia y con respeto del principio de confidencialidad, reanudándose el proceso con los efectos que correspondan a efectos de su homologación.

Y los demás establecidos en el Título II de la Ley 5/2012 de mediación en asuntos civiles y mercantiles.

Quinta.- Gastos de ejecución del acuerdo.

El Convenio no generará gastos para el Consejo General del Poder Judicial.





Consejo General del Poder
Judicial



XUNTA DE GALICIA



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

Cada una de las otras partes firmantes del presente acuerdo asumirá el coste de las actuaciones que deba realizar de conformidad con su clausulado, y de acuerdo a sus respectivas normas de gestión económica.

Sexta.- Seguimiento estadístico.

El equipo de mediación, únicamente a efectos estadísticos, empleará la aplicación informática "Mediación Intrajudicial" que a través de internet tiene diseñada la Consejería de trabajo y Bienestar.

La Consejería de Trabajo y Bienestar cubrirá semestralmente la ficha estadística que semestralmente solicita el Consejo General del Poder Judicial, para el seguimiento de la mediación intrajudicial en todo el territorio.

La Consejería de trabajo y Bienestar elaborará una memoria anual de todas las actuaciones llevadas a cabo por el equipo de mediación".

Séptima.- Incompatibilidades.

Serán motivos de incompatibilidad que obligarán a renunciar a la realización de la mediación, además de los previstos en el artículo 6 del Decreto 159/2003, de 31 de enero, que regula la figura del mediador familiar, el Registro de Mediadores Familiares de Galicia y el reconocimiento de la mediación gratuita, los siguientes:

- a) Tener vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado con alguna de las partes intervinientes en la mediación, o con sus asesores, representantes legales o mandatarios, así como compartir el despacho profesional o estar asociado con estos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
- b) Haber intervenido profesionalmente con anterioridad en el asunto objeto de mediación.
- c) Tener interés directo, de cualquier tipo, en el asunto objeto de su actuación, o una manifiesta vinculación –directa o indirecta– económica, laboral o de otro tipo que pueda comprometer su independencia profesional.
- d) Cualquier otro supuesto establecido legal o reglamentariamente.

Octava.- Confidencialidad de la información y de los resultados.

Los integrantes de los equipos de mediación dependientes de la Consejería de Trabajo y Bienestar se comprometen a garantizar la total confidencialidad de los datos personales y familiares a los que tengan acceso como consecuencia de las actividades realizadas, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.



Consejo General del Poder
Judicial



XUNTA DE GALICIA



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

No obstante, se procederá a la cumplimentación voluntaria por los partícipes en el proceso mediador de una encuesta sobre el grado de satisfacción del servicio de mediación.

Igualmente se comprometen a observar lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en lo que se refiere al acceso limitado a los propios interesados en relación con los documentos que contengan datos referentes a la intimidad de las personas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 4/2006, de 30 de junio, de transparencia y buenas prácticas en la Administración pública gallega, este acuerdo será objeto de difusión en el *Diario Oficial de Galicia* y en las páginas web de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia y de la Consellería de Trabajo y Bienestar.

Novena.- Comisión de seguimiento del acuerdo.

Según lo previsto en el artículo 6.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, se creará un órgano mixto de vigilancia y control de la ejecución y aplicación de este acuerdo y de resolución de controversias administrativas.

Este órgano estará integrado por los siguientes miembros:

- Un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial.
- El titular de la Dirección General de Familia e Inclusión, que podrá delegar en el subdirector general de Familia y Menores.
- El titular de la Dirección General de Justicia, que podrá delegar en el subdirector general de Medios de la Administración de Justicia.
- El fiscal superior de la Comunidad Autónoma de Galicia, o fiscal en quien delegue.

Actuará como secretario, con voz pero sin voto, la persona que ejerza la jefatura del Servicio de Familia y Conciliación de la Dirección General de Familia e Inclusión.

La comisión se reunirá de forma ordinaria cada tres meses con el objeto de garantizar la calidad del servicio, corregir disfuncionalidades y analizar la experiencia; y con carácter extraordinario cuando fuera necesario, a petición de cualquiera de las partes. A tales efectos la comisión podrá requerir la presencia del equipo mediador.





Consejo General del Poder
Judicial



XUNTA DE GALICIA



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

Decima.- Vigencia del acuerdo.

El presente convenio de colaboración tendrá efectos a partir del día siguiente a su firma y su vigencia se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2014, pudiéndose, en su caso, prorrogar mediante acuerdo expreso por periodos anuales.

Undécima.- Naturaleza jurídica.

El presente acuerdo tiene naturaleza administrativa y se regirá por las cláusulas establecidas en el mismo, y en su defecto, por lo regulado en el Real decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público.

La Administración disfrutará de todas las prerrogativas inherentes a la naturaleza administrativa del acuerdo.

Duodécima.- Resolución del acuerdo.

Será causa de resolución del presente acuerdo el incumplimiento por una de las partes de cualquiera de las obligaciones contraídas y/o cláusulas establecidas en él, así como el incumplimiento de la normativa vigente en la materia, lo que facultará a las otras partes para la resolución del mismo, quedando automáticamente anulados todos los derechos derivados, pero no así las obligaciones inherentes.

Decimotercera.- Cuestiones litigiosas.

Corresponde a la Consellería de Trabajo y Bienestar la resolución de las cuestiones litigiosas que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución o efectos del presente acuerdo, poniendo sus acuerdos fin a la vía administrativa.

Contra los mismos se podrá interponer recurso potestativo de reposición o recurso contencioso-administrativo, según lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Decimocuarta.- Obligación de cumplimiento de los compromisos.

En caso de finalización del presente acuerdo, cualquiera que sea la causa, las partes se comprometen a concluir las obligaciones y compromisos pendientes asumidos con anterioridad a la fecha de finalización del mismo.





Consejo General del Poder
Judicial



XUNTA DE GALICIA



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

Decimoquinta.- Clausula final.

La firma del presente Convenio no es óbice para el establecimiento o ampliación de relaciones de colaboración en el ámbito de la mediación con otras entidades o instituciones, ni excluye la firma de cualquier otro Convenio de similar naturaleza.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, y para la debida constancia, se firma el presente acuerdo de colaboración por cuádruplicado ejemplar en el lugar y fecha arriba indicados.

POR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER
JUDICIAL POR LA

Carlos Lesmes Serrano

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, ADMS. PÚBLICAS Y
JUSTICIA



Alfonso Rueda Valenzuela

POR LA CONSELLERÍA DE TRABAJO Y
BIENESTAR

Beatriz Mato Otero

POR LA FISCALÍA SUPERIOR DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA

Carlos Varela García



ANEXO

**PROTOCOLO PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR INTRAJUDICIAL EN
LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES QUE CONOCEN DE PROCESOS DE FAMILIA**

La derivación a la primera sesión informativa presencial (PSIP)

1. Importancia

La primera sesión informativa presencial (PSIP) es el instrumento más útil para dar a conocer las ventajas de la mediación familiar intrajudicial a las partes y a los operadores jurídicos.

Es esencial que la derivación a la PSIP se realice desde el propio juzgado, y también importante que la efectúe el juez en resolución judicial con el fin de que las partes acudan. En efecto, si el juez es el que hace la derivación, o bien la realiza el secretario en las comparecencias de inventario o liquidación de bienes, es más probable que se acuda a la sesión.

Las partes suelen estar confundidas sobre lo que se pretende en la mediación, y el hecho de que acudan a la PSIP resulta esencial para poder explicar personalmente lo que se pretende y su importancia tanto para ellos como para sus hijos. Por eso deben arbitrase los medios necesarios para garantizar la inmediata citación de los interesados. Se considera útil la creación de agendas únicas informáticas, y en su defecto deberá arbitrase la posibilidad de que el juzgado consiga la cita por teléfono o por fax con carácter inmediato si la PSIP se desarrolla fuera de las instalaciones judiciales.

Es importante también que el juzgado remita al equipo de mediación o al profesional que realice la PSIP una ficha de derivación, para que cuente con unos datos mínimos necesarios que permitan desarrollar la sesión informativa. Dicha ficha deberá contener, al menos, información sobre el número de autos, el tipo de procedimiento, la identificación de los intervinientes, el número de hijos y sobre si se ha suspendido o no el procedimiento. La ficha será completada una vez finalizada la PSIP.

La experiencia indica que casi todos los asuntos pueden beneficiarse de la mediación aún cuando no se consigan acuerdos. Por ello conseguir que no se falte a la sesión informativa es muy importante.

2. Momento en que puede ser acordada

El juez valorará el momento adecuado para la derivación a la PSIP, respetando siempre el hecho de que en ese momento ambas partes estén debidamente personadas en autos.

a) Puede realizarse en el proceso principal declarativo, tras la contestación a la demanda, incorporando la citación a la sesión informativa dentro de la resolución que convoca a juicio y con carácter previo a esa fecha, pero no hay inconveniente en que sea en otro momento procesal. A veces resulta conveniente la derivación en la sentencia cuando es preciso la mejora de la comunicación entre las partes para tratar de determinadas cuestiones relativas a sus hijos si se prevé que pueden ser objeto de litigios entre las partes, especialmente en cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la patria potestad conjunta o con los regímenes de custodia o visitas, comunicaciones y estancias o gastos extraordinarios.

b) Cabe también realizar la derivación a la PSIP en el acto de la comparecencia o en el propio auto de medidas provisionales previas o coetáneas, una vez apreciado que el caso puede ser susceptible de mediación.



Consejo General del Poder
Judicial



XUNTA DE GALICIA



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

c) En la fase de ejecución de sentencia los momentos de derivación pueden variar.

- Así, si se trata de controversias sobre el ejercicio de la patria potestad que se tramiten como expedientes de jurisdicción voluntaria, el momento idóneo para la derivación será antes de la comparecencia a vista, tras oír a los progenitores sobre la cuestión controvertida, ya que normalmente se señala vista. No obstante lo anterior, se podrá valorar si se hace la derivación tras el escrito inicial, sin perjuicio de señalar la comparecencia más tarde y de lo que diga la otra parte en la contestación.

- Si se trata de ejecutar medidas personales, se estima que una vez presentada la demanda de ejecución, y antes de despachar ejecución, debería darse audiencia a la otra parte, y a la vista de sus alegaciones proceder, en su caso, a la derivación a la PSIP. También puede hacerse la derivación en el auto que resuelve la ejecutoria dando un contenido concreto a las sesiones de mediación y pudiendo incluso concretar las fechas, con el objetivo no de lograr un acuerdo sino de evitar la repetición de ejecutorias entre las mismas partes por cuestiones de similar índole (vacaciones, gastos extraordinarios, etc.).

- En los supuestos de ejecución de medidas económicas de cantidad líquida, el momento de derivación será tras la oposición del ejecutado al despacho de ejecución, o bien en el auto de resolución de la oposición si se establecen intervenciones mediadoras de futuro en la propia resolución. No es conveniente en estos casos suspender el despacho de ejecución. Si se trata de ejecuciones dinerarias de cantidad líquida que se tramitan conforme a los artículos 712 y siguientes de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC), la derivación debe hacerse tras la contestación del ejecutado y antes de la vista a juicio verbal en caso de oposición. En estos casos a veces conviene también derivar a mediación en el auto que resuelve la ejecutoria tras la vista, con contenido concreto de cada sesión mediadora y pudiendo incluso fecharlas e incorporar en el auto de forma motivada las consecuencias de no acudir a las sesiones de mediación previstas en la resolución.

3. Asuntos susceptibles de ser derivados a la PSIP

La remisión a la sesión informativa puede hacerse en todos los procedimientos de familia, sin limitación apriorística de los temas objeto de mediación. No obstante, quizás puede ser recomendable que en una primera fase se comience por derivar a la PSIP solo aquellos asuntos en los que la controversia se centre en las medidas de carácter personal: guarda y custodia, visitas, controversias sobre patria potestad, etc. En todo caso, es recomendable que la PSIP se lleve a cabo en la sede judicial en lugar adecuado para ello, con respeto a la intimidad y donde sea posible escuchar con la tranquilidad precisa al profesional que la realiza.

En el supuesto de aceptarse la derivación, las sesiones de mediación se harán ya fuera de la sede judicial.

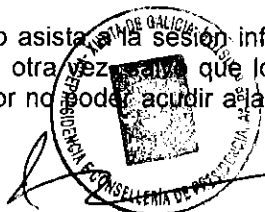
A la sesión informativa deben acudir las dos partes, acompañadas o no de sus respectivos letrados, quienes son también invitados a acudir (y se estima conveniente que acudan).

Por ley están excluidos de la mediación, y por tanto de la PSIP, los casos en los que ha habido violencia, si bien a veces es esta una información con la que el juzgado no cuenta porque nada se ha dicho al respecto ni en la demanda ni en la contestación.

4. Negativa a acudir a la sesión informativa o a utilizar el servicio de mediación

De la citación a la sesión informativa pueden resultar varias posibilidades:

a) Que la pareja no asista a la sesión informativa o que no lo haga uno de sus miembros. En este caso no se les cita otra vez, salvo que lo pidan ambos. A veces son los letrados quienes piden cambio de fecha por no poder acudir a la inicialmente indicada.





Consejo General del Poder
Judicial



XUNTA DE GALICIA



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

b) Que la pareja asista, sea informada y no acepte. En este caso continúa el proceso, sin que al juzgado deban constarle las razones de la no aceptación ni cuál de los dos fue el que no quiso la derivación.

c) Que la pareja acepte acudir a mediación. Véase el apartado siguiente.

Como ya se ha dicho, se considera conveniente que los letrados intervengan en la primera sesión informativa presencial, debiendo esta constar de dos partes: una primera con las partes y letrados, a fin de que estos obtengan una información general; y una segunda exclusivamente con los interesados, con un contenido de fondo preparatorio de las sesiones de mediación. En algunos juzgados la información a los letrados es proporcionada directamente por el propio juez.

Intervención del servicio de mediación intrajudicial

a) Derivación al servicio de mediación

Si las partes deciden someterse a mediación (artículo 770-7ª de la LEC), sus representaciones procesales presentarán escrito (bien conjunto o individualizado) haciéndolo constar. Cabe también la posibilidad de que si dicha manifestación se realiza en el acto de una vista o comparecencia, quede recogida en la propia acta.

Si es solamente una de las partes quien solicita la intervención mediacional, sin detener el curso de los autos se oirá a la otra parte para que manifieste si muestra o no su conformidad con tal solicitud.

b) Repercusión procesal

1.- Suspensión del proceso

Una vez de acuerdo ambas partes en acudir a mediación, la solicitud formulada por escrito o en el acto de la vista será proveída por el juzgado mediante el dictado de un auto en el que se acceda a la derivación del caso hacia el servicio de mediación familiar y se acuerde la suspensión del proceso por el plazo previsto en el artículo 19 de la LEC.

Cabe la posibilidad también de que se efectúe la derivación a mediación sin suspensión de curso de los autos (por ejemplo, porque las partes no deseen paralizar el procedimiento y exista plazo suficiente para practicar las sesiones de mediación entre la citación a juicio y la celebración de la vista correspondiente). En este caso bastará con un proveído por el que se acuerde la intervención del servicio de mediación adscrito al juzgado, o con dejar constancia en autos de las manifestaciones de las partes si deciden acudir a un servicio privado de mediación.

La derivación al servicio de mediación intrajudicial se realizará por la persona del juzgado designada al efecto (miembro del equipo técnico, secretario judicial, funcionario) mediante la correspondiente ficha de derivación.

Si agotado el plazo de suspensión del curso de los autos no hubiesen finalizado las sesiones mediacionales, podrán las partes solicitar una prórroga del mismo, siempre que acrediten mediante certificación del mediador que continúa la mediación.

Finalizada la intervención mediadora con acuerdo total o parcial o sin acuerdo, el mediador comunicará al juzgado dicho extremo, entregando a las partes, en su caso, el acuerdo mediacional alcanzado (total o parcial) y remitiendo al juzgado una ficha a efectos de constancia, siempre con respeto al principio de confidencialidad.



Consejo General del Poder
Judicial



XUNTA DE GALICIA



FISCALÍA GENERAL
DEL ESTADO

Se recomienda que tanto en los supuestos de acuerdo total o parcial como si no ha habido acuerdo se realicen encuestas de satisfacción de los usuarios del servicio de mediación, a fin de valorar su funcionamiento y poderlo mejorar.

2.- Reanudación del proceso

Si no se ha alcanzado acuerdo en la mediación, se alzaré la suspensión del proceso a petición de cualquiera de las partes, reanudándose el curso de los autos en el trámite en que se encontraba. Se recomienda que estos asuntos tengan prioridad en los señalamientos a fin de compensar la demora que el intento mediacional haya podido generar. A tal fin es útil que la circunstancia de que se ha llevado a cabo una mediación se haga constar en lugar destacado y visible de la carátula (se puede hacer, por ejemplo, colocando una etiqueta rotulada como "MEDIACIÓN").

Si el acuerdo ha sido parcial, deberán las partes ponerlo de manifiesto al juzgado, reanudándose el proceso contencioso, respecto a las cuestiones no consensuadas, en la forma expuesta en el párrafo anterior. La resolución final que se dicte (auto o sentencia) recogerá el acuerdo alcanzado sobre las medidas que hayan sido consensuadas con el mediador y resolverá sobre las que exista discrepancia.

Si el acuerdo ha sido total, deberán las partes presentar un escrito solicitando el cambio de procedimiento a consensual (art. 770-5ª de la LEC), acompañando el correspondiente convenio regulador previsto en los artículos 90 del Código civil (CC) y 777.2 de la LEC y, en su caso, el acuerdo final alcanzado en el procedimiento de mediación familiar, continuándose la tramitación conforme a lo dispuesto en este precepto. Si la mediación con acuerdo total se ha desarrollado en trámite de ejecución, se dictará un auto bien aprobando los acuerdos si no suponen una modificación sustancial de las medidas acordadas en su día, bien acordándolas cautelarmente con base en el artículo 158.4 del CC y remitiendo a las partes al proceso de modificación consensual del artículo 775.2 de la LEC.

